

Don Pasqual Quiroz Talon, Don Nicolas de  
Sierra, Don Miguel Lardizabal y Don Luis Melendez Bru-

## LA SUPREMA JUNTA CENTRAL GUBERNATIVA

del Reyno invariable siempre en los principios de justicia y beneficencia que tomó por constante basa de sus procedimientos, ha dispensado en medio de las turbulencias de la guerra la mas decidida proteccion á quantos individuos de la Nacion Francesa vivian en los dominios españoles, cuidando de su seguridad individual por quantos medios dictaba la prudencia, y refrenando con exemplares castigos el desmedido zelo, ó mas bien fundada indignacion que han excitado contra el nombre frances las horrendas inauditas hostilidades, desconocidas del derecho de la guerra y hasta de los pueblos salvages, executadas en España por las tropas francesas de que fué invadida. Pero siendo muy otra la conducta del Emperador de Francia con los Españoles mas generosos, honrados y leales, que han tenido la desgracia de caer en su poder, reducidos á la esclavitud unos, forzados á combatir contra su Patria otros, y todos despojados de su libertad y de sus bienes, no puede ya dexar de acudir por medio de una justa represalia al socorro de estas desgraciadas víctimas en quanto le sea posible, resarciéndoles en algun modo y á sus familias de los intereses que han perdido, sacrificados á su honor y sus deberes patrióticos. Y á este fin, en nombre del Señor Rey Don Fernando VII. ha decretado y decreta se embarguen y secuestren todos los bienes y efectos de los Franceses, residentes en España, que por la ley ó privilegio Real no gocen de una justa excepcion; y para que en todo se guarde la mas escrupulosa justicia, ha venido en crear y crea desde luego un Tribunal ó Junta de represalias, que segun lo practicado en otras ocasiones conozca privativamente con derogacion de todo fuero de quantos negocios é incidencias ocurran en este asunto, para lograr el objeto á que aspiran en beneficio de los vasallos del Rey, y los deseos paternales de la Junta Central; y en consecuencia ordena lo siguiente: La Junta de represalias se compondrá de los Ministros y Consejeros Supremos del Rey en los de Castilla, In-



dias y Guerra Don Pasqual Quilez Talon, Don Nicolas de Sierra, Don Miguel Lardizabal y Don Luis Melendez Bruna; de un Fiscal que lo será el de guerra Don Justo María Ibar Navarro; de un Relator, y como tal se nombra á Don Rodrigo Sanjurjo, y de un Secretario, cuyas funciones desempeñará el Escribano de Cámara de la Real Audiencia de Sevilla D. Josef de Medina, que desde luego y sin necesidad de otro nombramiento entrarán á exercer sus funciones.

Cuidará este Tribunal de que se formen por las Justicias de los respectivos pueblos inventarios exáctos judiciales de todos los bienes, caudales, efectos, y derechos en qualquiera manera pertenecientes á los Franceses existentes en España, interviniendo á estas diligencias el Apoderado que hayan dexado, ó el que nombraren y los represente.

Dispondrá por ahora la administracion de dichos bienes segun sus clases, calidades y proporciones, señalando el lugar y las personas en que hayan de entrar y custodiarse los fondos existentes, ó los que se formen de resultas de esta administracion.

Que se hagan las cobranzas de las letras, vales ó escrituras otorgadas á favor de los mismos Franceses de plazo vencido, y las que en adelante se vencieren, tomando las precauciones convenientes para descubrirlas é impedir su ocultacion, ó que en los libros de comercio se cancelen ó aumenten partidas en favor ó en contra.

Que se hagan las liquidaciones de ajustes de cuentas convenientes con los cuerpos, casas de comercio ó particulares con quienes tuvieren negocios pendientes los mismos Franceses, proveyendo que todos sus papeles de comercio y correspondencias no padezcan extravío, ni se manifiesten mas que á las personas que de ello deban tomar conocimiento, por lo que pudiera influir su publicacion en el comercio contra otros interesados.

Tambien mandará á las Justicias de los respectivos pueblos del Reyno en que se hagan tales embargos, que de su importe paguen desde luego las deudas legítimas que tuvieren contra sí dichos Franceses, de plazo vencido, y



en que no haya duda sobre su certeza en la cantidad y calidad; pues en las que la hubiere y no constase de documento fehaciente, no podrán tomar providencia, y los interesados acudirán á la Junta á deducir sus acciones y derecho.

Las naves, efectos, y bienes ocupados á los Franceses ántes de declararse la guerra y luego que se tuvo noticia de sus insultos, deberán estar sujetos á la jurisdiccion y facultades de la Junta para su cobro, recaudacion, uso y destino que haya de dárseles, como los secuestrados despues de publicada la guerra.

Mas los apresados con mano armada, rota la paz, deberán sujetarse á lo acordado en punto á presas por las órdenes generales y particulares que gobiernan en esta materia.

En dicha Junta se han de deducir, justificar y liquidar los daños, perjuicios y menoscabos que hayan causado los Franceses á la Nacion Española, ó sus individuos con su agresion, irrupciones por mar y tierra, sus insultos y falta de administracion de justicia á los que se la hayan pedido, ó por el dolo, fraude ó violencia con que hayan impedido lo executen.

Los Españoles que prueben lo referido en dicha Junta deberán ser indemnizados de todo su perjuicio ó daño padecido, con el valor y producto de los bienes embargados á los Franceses por el derecho de represalia.

A la misma Junta acudirán las mugeres y los hijos de los Franceses siempre que aquellas y sus hijos fuesen naturales de España, para deducir sus derechos por razon de dote, gananciales, alimentos, ú otro título que tengan contra los caudales embargados; y la Junta en atencion á sus circunstancias les administrará justicia y atenderá sus solicitudes en quanto corresponda.

Si despues de indemnizados los cuerpos, casas de comercio y particulares, de sus respectivos daños y perjuicios, sobrasen fondos de los embargos y secuestros, lo hará presente la Junta para la providencia que corresponda.

El Fiscal velará para impedir haya fraudes, colusiones,



ó simulaciones en las demandas que se propongan en la Junta, con el fin de conseguir indemnizaciones, ó satisfacción de créditos, figurados contra dichos bienes embargados, pidiendo se castiguen á los que cometan estos excesos, y procurando que en todo se observe el mejor orden por quantos subalternos manejen estos asuntos, y que sin atraso se administre justicia á los interesados.

La misma Junta queda encargada de formar y presentar para su aprobacion la instruccion correspondiente á fin de proceder en los varios casos y ocurrencias que pueden sobrevenir; como igualmente de arreglar las horas y dias de su despacho, segun le pareciere mas conveniente, y el lugar de sus sesiones. Y este Real Decreto se imprimirá y circulará en la forma debida para que llegue á noticia de todos. Tendreislo entendido, y dispondréis lo conveniente á su cumplimiento. = M. El Marques de Astorga, Vice-Presidente. = Real Alcázar de Sevilla 2 de Febrero de 1809. = A D. Benito Ramon de Hermida.

Se hizo notoria en el Real Acuerdo General celebrado por los Señores Oidores de la Real Chancillería de Granada á diez y seis de Febrero de mil ochocientos nueve, y se mandó guardar y cumplir, poner un exemplar en cada Sala, repartir á los Señores, é imprimir y comunicar á las Justicias de los Pueblos Cabezas de Partido de este Tribunal.

*Ramon de Linares.*

